

Política y educación social

Desde hace ya varios años, la política está sufriendo un considerable desprecio. Son las consecuencias de un modelo de democracia que ha tendido a alejarse y a desmovilizar a los ciudadanos y de una ideología dominante que convierte derechos, personas e instituciones en mercancías. Si lo que mandan son los mercados, de qué sirven las instituciones democráticas?

Estamos ante una crisis de representación que puede llevar a una profundización y una extensión de la democracia, que dé respuestas a las necesidades y conflictos de un mundo global, diverso y postindustrial. Pero a lo que estamos asistiendo es a una deriva autoritaria, nacionalista y xenófoba, que en nombre del pueblo –el propio, claro– levanta muros, reales y virtuales, de exclusión, y amenaza seriamente las conquistas civiles, sociales y culturales que con tantos esfuerzos y luchas habían ido logrando tras la segunda posguerra mundial. En este contexto, el impacto de la crisis con la multiplicación del *precariado* y el dominio de un, en absoluto disimulado, neodarwinismo social y económico, en medio de la inseguridad global, lleva a muchos a confiar en unos populismos que con sus discursos demagógicos y falsamente *antiestablishment* llenan a menudo el vacío de una izquierda desorientada, incapaz de plantear alternativas al neoliberalismo triunfante.

En este escenario, la política es más necesaria que nunca. La política entendida como ejercicio y relaciones de poder, como instrumento colectivo de toma de decisiones, como expresión de lo público y común. De la *Res Publica*, en definitiva. Desmercantilizar, luchar contra las desigualdades y la exclusión significa politizar en un sentido amplio. Y esto es trascendental también para todas las profesiones sociales, incluida la educación social.

Sin embargo, existe una tendencia muy extendida en ver la política como algo externo a la acción social, como una parte de un contexto que hay que conocer, en la medida en que afecta a la práctica profesional, pero que no pertenece al núcleo constitutivo de la disciplina y la profesión. Es que además, los discursos tecnócratas y/o asistencialistas, tan en boga en los últimos tiempos, han tendido a separar acción social y acción política. El educador social resultaría ser, así, un experto que, armado con sus técnicas, su lenguaje y su titulación sería capaz de identificar problemas, prescribir soluciones y medir actitudes, habilidades y necesidades desde una asepsia científica y profesional, ajena a intereses sociales e ideologías. Mientras que los políticos estarían tan solo interesados en reproducir y legitimar su poder, interfiriendo, limitando o incluso ignorando las “soluciones” propuestas por los técnicos.

Una visión como ésta, además de falsa, erosiona los cimientos de la educación social, ya que todo lo social tiene una dimensión política. En términos generales, sin embargo, tres serían las principales razones que fundamentarían el carácter político de la educación social. En primer lugar, porque la dimensión dual de la acción social obliga a elegir entre modelos y acciones que contribuyen a generar o consolidar desigualdades o paliarlas e incluso a corregirlas. Obliga siempre a interrogarse sobre los fundamentos, los procesos y los resultados de la acción que se lleva a cabo, es decir, sobre su impacto en las asimetrías de poder, en la estructura de desigualdades y en el bienestar de los ciudadanos y de su comunidad. ¿Qué significa y en qué se concreta la justicia social, el bienestar, la libertad o la cohesión social son preguntas intrínsecamente políticas, en la medida en que tienen que ver con valores, cuya definición y materialización se da en un contexto de grupos sociales con intereses y necesidades diferentes y a menudo contrapuestos. La ambigüedad de la acción social, la politiza inevitablemente. En segundo lugar, porque el espacio social y profesional de la educación social está constituido políticamente. Su margen de maniobra, su fundamentación e incidencia dependen de cómo se articulen las políticas públicas y estas dependen de la relación dialéctica entre estado y movilización social. Así, la actual hegemonía neoliberal no sólo pone en peligro los estados del bienestar, sino que también cuestiona los fundamentos de la acción social al negar la existencia de la sociedad, convirtiendo los problemas y las necesidades sociales en deficiencias individuales que exigen soluciones y tratamientos individuales, y al cuestionar la idea de intervención. En la utopía neoliberal no hay lugar para nada social, incluida la educación social, que se convertiría en un simple proveedor de *consejos* para ser mejor emprendedor y tener la actitud adecuada, siempre positiva, por supuesto. En definitiva, el espacio de la educación social es un espacio políticamente construido. Su geometría y geografía dependen de decisiones, conflictos y movilizaciones políticas. Y es en ese sentido que se puede afirmar que el compromiso político debería ser un componente central del compromiso profesional.

En tercer lugar, porque si entendemos que un objetivo central de la acción social es empoderar personas, grupos y comunidades, esto nos sitúa ante un tema central del análisis y la práctica políticas: el ejercicio y la distribución del poder.

No debemos olvidar, en conclusión, que la educación social implica siempre una elección entre concepciones del ser humano y modelos de sociedad. Una elección que obliga antes de hacer, a preguntarse por qué se hace y qué consecuencias tendrá para el bienestar de las personas. Y eso, antes, ahora y en el futuro, es un debate esencialmente político, y por eso no lo podemos dejar sólo en manos de los políticos.

Jordi Sabater
Profesor de la Facultad de Educación Social
y Trabajo Social Pere Tarrés-URL